

U. de Chile rechaza reunión con presidenta de Azul Azul y endurece negociación por uso de nombre y logo



La casa de estudios se negó a conceder una audiencia al directorio de la concesionaria del club deportivo y pidió solicitarla nuevamente vía ley de lobby, especificando claramente el propósito del encuentro. Según fuentes universitarias, se trata de una señal de desconfianza hacia el directorio vinculado a Michael Clark -hoy en prisión preventiva- y una forma de presionar en las negociaciones. La U. de Chile exige una reforma total al convenio que facilita los emblemas del plantel o bien llegar a un tribunal de arbitraje.

Frustrada reunión. Hace tres meses Cecilia Pérez, la presidenta de Azul Azul, solicitó una reunión con la nueva rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, “para poder saludarla formalmente y felicitarla por su nuevo cargo”, señalaron. Pero la universidad les respondió por escrito que Mizala está inhabilitada para poder relacionarse con la concesionaria del club deportivo.

Esto porque Mizala es una de las víctimas de Sartor y perdió sus ahorros familiares en la sociedad, hoy indagada por la justicia, que controlaba Azul Azul.

El plantel de estudios ofreció, en cambio, una reunión con la nueva prorectora Dorotea López que fue encomendada para revisar el histórico convenio en que la casa de estudios superiores le facilita el nombre, logo y emblemas al equipo de fútbol.

Dicha reunión nunca se concretó. La universidad pidió condiciones como que sólo acudieran cuatro personas y no todo el directorio, y luego la sociedad anónima fue postergando el encuentro varias veces hasta que se canceló la cita.

Pero ahora, tras el lapidario informe que realizó el jurista Andrés Jana, y que arrojó una serie de graves incumplimientos en el convenio (suscrito en 2008 y que rige, considerando prórrogas, hasta 2052), Cecilia Pérez volvió a solicitar una audiencia con la prorectoría.

Sin embargo, en la universidad no se les concedió la cita, y pidieron formularla de nuevo vía plataforma de lobby, especificando claramente qué propósito tiene la reunión.

Señal política. Según fuentes de la casa de estudio, no se trató solo de un rechazo administrativo, sino que también de una señal política de que las autoridades universitarias no consideran válidos ni les generan confianza los miembros del directorio vinculados al expresidente de Azul Azul, Michael Clark, hoy en prisión preventiva, formalizado por administración desleal, entrega de información falsa al mercado y negociación incompatible en el caso Sartor.

A Clark lo responsabilizan de varios incumplimientos del convenio.

La jugada de la Universidad de Chile anticipa la dura negociación que viene en las próximas semanas en torno al convenio.

Tras recibir el “informe Jana” -que había sido encargado por la anterior rectora Rosa Devés-, se nombró una comisión encabezada por Dorotea López y los principales decanos: Óscar Landerretche de la FEN; Gabriel Hernández de Derecho; y Susana Mondschein de Ingeniería; además de un equipo especializado.

Informe Jana . El informe de 80 páginas señala una serie de irregularidades en el cumplimiento del convenio respecto al resguardo de la imagen y el prestigio de la institución.

Esto no sólo por la opacidad en la propiedad de Azul Azul y la investigación judicial en curso; sino por distintas falencias como la asociación de club deportivo al auspicio de casas de apuestas, el uso irregular de emblemas antiguos, la utilización de la marca en iniciativas de e-tokens y criptomonedas, entre otros puntos.

Azul Azul ha pedido conocer el contenido del informe Jana pero no ha recibido respuesta. Cecilia Pérez y otros directivos han manifestado que no consideran que exista incumplimiento del convenio pero están abiertos a mejorarlo en acuerdo con la universidad.

Dos salidas. Los caminos que han planteado las autoridades universitarias son dos: la primera es una modificación total del acuerdo que entre otros puntos aumente el control de la universidad sobre las decisiones del club, incrementando la representación en el directorio y otorgándoles derecho a veto en algunas decisiones. Actualmente hay dos directores de la casa de estudios en el directorio de Azul Azul compuesto por 11 personas.

También redefinir el royalty o pago que entrega la sociedad a la universidad. Ahora es de \$200 millones anuales, una cifra minúscula en comparación a los presupuestos que maneja tanto la universidad como el club.

La segunda alternativa es la vía judicial a través de un arbitraje para poner fin al convenio. Que la “U” continúe sin su nombre histórico, y entregar los emblemas a un equipo de estudiantes o de tercera división.

Presión por el centenario. En la universidad estiman que es Azul Azul el que está más presionado en los plazos para llegar a un buen acuerdo. Esto porque el liquidador de Sartor necesita vender las acciones y un cambio en el nombre del club podría generar un desplome.

Por otra parte el equipo de fútbol se prepara para conmemorar en 2027 su centenario y necesita tener claro los emblemas que ocupará.